

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DIECIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C
Bogotá D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós

Radicado No. 2019-01462

Se procede a resolver el recurso de reposición en subsidio de apelación, interpuesto por el extremo demandado en contra del auto de fecha 22 de marzo de 2022, mediante el cual se revocó el auto de data 09 de noviembre de 2021 que aprobaba la liquidación de costas; se dejó sin valor y efecto auto de fecha 01 de febrero de 2022 y se señaló como agencias en derecho la suma de \$4.800.000.00 M/CTE.

Tal recurso se fundamentó en que, la parte demandada no ejerció oposición a las pretensiones de la parte demandante y por ende no hubo controversia ni parte vencida, y que son estos aspectos los que justifican la condena en costas y la fijación de agencias en derecho, ello en los términos del numeral 1 del art. 365 del Código General del Proceso; y en que la suma de \$120.000.000.00 M/CTE no puede servir para fijar la cuantía de las pretensiones y consecuentemente como factor para determinar el valor de las agencias en derecho; que este asunto carece de cuantía o de pretensiones pecuniarias, ya que lo pretendido fue la cancelación de unos pagarés.

CONSIDERACIONES.

Sin un mayor despliegue considerativo de entrada el Despacho advierte que no hay lugar a reponer el auto objeto de impugnación, por cuanto no se evidencia un yerro en la decisión adoptada en el auto de fecha 22 de marzo de 2022, a tal conclusión se llega si se tiene en cuenta que, las costas procesales son los gastos en que incurren las partes en el marco de un proceso judicial y que debe asumir la parte que resulte vencida. De conformidad con el art. 361 del Código General del Proceso, las costas procesales comprenden (i) las expensas y (ii) las agencias en derecho, lo que ha sido además reiterado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional¹.

Las expensas corresponden a todos aquellos gastos surgidos con ocasión del proceso y necesarios para el trámite del juicio, distintos del pago de apoderados, tales como son el valor de copias, valor de notificaciones, publicaciones, impuestos de timbre, honorarios de peritos, honorarios de auxiliares de la justicia, gastos de desplazamiento por diligencias fuera del despacho judicial, gastos de traslado de testigos, por citar algunos ejemplos². Las agencias en derecho son la compensación por los gastos de representación judicial en que incurrió la parte vencedora, aun cuando pueden fijarse sin que necesariamente hubiere mediado la intervención directa de un profesional del derecho. Obedecen a la suma que el juez debe ordenar en beneficio de la parte favorecida para reconocerle los costos afrontados por la representación de un abogado o, si actuó en nombre propio, como contraprestación por el tiempo y esfuerzo dedicados a la causa³.

Ahora bien, frente a lo aducido por el extremo demandado en cuanto a que no hubo oposición a las pretensiones de la demanda, es dable decir que esta afirmación se enmarca en la figura del allanamiento, consiste en la posibilidad con que cuenta una persona, natural o jurídica de aceptar los hechos y pretensiones elevadas por el demandante en un proceso, en cualquier momento y hasta antes de dictarse sentencia. Sobre el particular, el artículo 98 del Código General del Proceso, establece: *“En la contestación o en cualquier momento anterior a la sentencia de primera instancia el demandado podrá allanarse expresamente a las pretensiones de la demanda reconociendo sus fundamentos de hecho, caso en el cual se procederá a dictar sentencia de conformidad con lo pedido. Sin embargo, el juez podrá rechazar el allanamiento y decretar pruebas de oficio cuando advierta fraude, colusión o cualquier otra situación similar (...)”*

¹ C. Const. Sentencia T-625/16. . M.P Maria Victoria Calle, “las costas procesales son aquellos gastos en que incurre una parte por razón del proceso. Esa noción comprende tanto las expensas como las agencias en derecho”

² C.E. Sala Plena. Ex. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU, agosto 6/2019. C.P. Rocío Araújo Oñate
³ C.E. Sala Plena. Ex. 15001-33-33-007-2017-00036-01(AP)REV-SU, agosto 6/2019. C.P. Rocío Araújo Oñate

Una vez revisado el plenario y en relación con lo anterior, el Despacho advierte que la apoderada judicial del extremo demandado, carece de facultad para allanarse, esto según lo dispuesto en el art. 99 ibídem, por lo cual el allanamiento que la togada realizara resultó ineficaz, por tanto, no es posible predicar que en virtud del allanamiento no hubo controversia ni parte vencida como erróneamente lo indica la recurrente.

Bajo el argumento esgrimido, esta sede judicial en Sentencia de instancia proferida el día 07 de octubre de 2021, indicó que examinado el poder conferido a la apoderada judicial de la parte demandada, se determina que la misma carece de la facultad expresa para allanarse, motivo por el cual el acto procesal referido al allanamiento resultaba ineficaz de conformidad con el numeral 4 del art. 99 del Código General del proceso, en razón a ello previo estudio de las pretensiones de la acción, se dispuso con base en la aceptación de los hechos efectuada por el extremo demandado tener como probado el pago total de la obligación adquirida por el demandante, es decir, la sentencia se profirió de manera anticipada tomando como sustento que no habían pruebas pendientes por practicar. Se reitera entonces, que no es de recibo que en el presente asunto no hubo controversia ni parte vencida, ya que el haber aceptado parcialmente los hechos de la demanda no constituye un allanamiento pleno, máxime si se tienen en cuenta las pretensiones de la demanda y las subsiguientes declaraciones proferidas en el fallo de instancia, que no atañen meramente a la cancelación de un título valor como lo menciona la recurrente, sino a la declaración del cumplimiento y extinción de la obligación adquirida en su momento por la parte demandante con el demandado.

Así pues, se cumple con el presupuesto indicado en el numeral 1 del art. 365 ibídem, concluyendo que en el presente asunto hay lugar a la condena en costas.

De otro lado y de manera breve, frente a la determinación de la cuantía el Despacho advierte que en el presente asunto se tuvo en cuenta lo normado en el art 26 del Código General del proceso, encontrando que el señalamiento de la cuantía en el escrito de la demanda se efectuó en legal forma, partiendo de ello, para la fijación de las costas procesales, de las cuales como se ha dicho hacen parte las agencias en derecho, el Despacho consideró el acuerdo PSAA16-10554 del 05 de agosto de 2016, emanado por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura que estableció las tarifas en agencias en derecho así:

1. PROCESOS DECLARATIVOS EN GENERAL.

En única instancia.	a. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario, entre el 5% y el 15% de lo pedido.
	b. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 8 S.M.M.L.V.
En primera instancia.	a. Por la cuantía. Cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario:
	(i) De menor cuantía, entre el 4% y el 10% de lo pedido.
	(ii) De mayor cuantía, entre el 3% y el 7.5% de lo pedido.
	b. Por la naturaleza del asunto. En aquellos asuntos que carezcan de cuantía o de pretensiones pecuniarias, entre 1 y 10 S.M.M.L.V.
En segunda instancia.	Entre 1 y 6 S.M.M.L.V.

Tenemos entonces que, las pretensiones de la demanda son de carácter pecuniario en cuanto se les asignó un valor económico, aunado a su directa relación con la declaración del cumplimiento de una obligación por una suma determinada de dinero, en este caso, por la suma de \$120.000.000.00 M/CTE. Adicionalmente, indica el acuerdo en mención que se abordará la naturaleza del asunto, en aquellos casos que carezcan de cuantía o de

pretensiones pecuniarias, así pues, como ampliamente se ha dicho, el presente asunto goza de cuantía y de unas pretensiones de carácter pecuniario.

De esta forma, se concluye que no le asiste razón a la recurrente al indicar que yerra este Despacho al tomar la suma de \$120.000.000.oo M/CTE como base para determinar las agencias en derecho.

Se advierte que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo del art. 9 del Decreto 806 de 2020, vigente al momento de presentación del recurso, la recurrente acreditó el respectivo traslado a los demás sujetos procesales.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Dieciocho Civil Municipal de Bogotá D.C.,

RESUELVE.

PRIMERO: NO REPONER el AUTO de fecha 22 de marzo de 2022, de conformidad con lo expuesto en el presente proveído.

SEGUNDO: CONCEDER el recurso subsidiario de APELACIÓN interpuesto contra la providencia aludida en el numeral precedente, en el efecto SUSPENSIVO de conformidad con el numeral 5 del art. 366 del Código General del proceso. para ello remítase el expediente a la Oficina Judicial de Reparto, a fin que sea enviado a los Juzgados Civiles del Circuito de esta ciudad, previo el trámite procesal respectivo. Ofíciense.

NOTIFÍQUESE,

FÉLIX ALBERTO RODRÍGUEZ PARGA
JUEZ

NOTIFICACIÓN POR ESTADO:
La providencia anterior es notificada por anotación en ESTADO No. 042 Hoy 01 de Julio de 2022.

La Secretaria *ad - hoc*

ELIZABETH PAOLA SÁEZ RUÍZ

JMEV

Firmado Por:

Felix Alberto Rodriguez Parga
Juez
Juzgado Municipal

Civil 018
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **593d2a36041c78bf0efb787306e21ca456cab5c5c1b8826406cea4d170bdce3c**
Documento generado en 30/06/2022 11:57:58 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>